



JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN
Medellín, treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

PROCESO	Acción de Tutela
ACCIONANTE	CARMEN EMILIA GUIAO MORENO
ACCIONADO	SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN, ALCALDIA DE MEDELLÍN Y SIMIT
PROCEDENCIA	Reparto
RADICADO	Nº 05001 40 03 014 2021 01002-00
INSTANCIA	Primera
PROVIDENCIA	No 238
TEMAS Y SUBTEMAS	Debido Proceso, Derecho de Defensa e igualdad
DECISIÓN	Hecho Superado

Procede el Despacho a resolver la solicitud de tutela promovida por CARMEN EMILIA GUIAO MORENO en contra de la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN, ALCALDIA DE MEDELLÍN Y SIMIT encaminada a proteger su derecho fundamental de Debido Proceso.

I-ANTECEDENTES

1.1.- Supuestos fácticos y pretensiones. - En síntesis, manifestó el accionante que solicitó mediante petición dirigida a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN la prescripción ante el archivo general de esa Municipalidad de la Acción de Cobro de los comparendos D050010000000007288352, D050010000000007283525, D050010000000005512892, D050010000000005476287, D050010000000005416505, D050010000000009255329.

Expone que dicha entidad emitió RESOLUCION 202150127226 DEL 04 DE AGOSTO DE 2021 por medio del cual decreto la prescripción, pero a la fecha de la presentación de la acción constitucional la entidad no ha procedido a dar cumplimiento a lo resuelto en la resolución.

1.2.-Trámite. - Admitida la solicitud de tutela el 23 de septiembre del año que avanza, se ordenó la notificación a las accionadas.

1.2.1 La SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN, quien manifestó que; en atención a la tutela de la referencia, me permito informarle que mediante Resolución 202150127226 se resolvió DECLARAR PROCEDENTE la prescripción de la acción ejecutiva, del proceso que se adelanta en contra del (la) señor (a) CARMEN EMILIA GUISAO MORENO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 43080547; en razón del comparendo N° D05001000000007288352, D05001000000007283525, D05001000000005512892, D05001000000005476287, D05001000000005416505, D05001000000009255329, DEL 08/06/2014, 12/06/2014, 20/12/2013, 23/11/2013, 0/09/2013, 19/04/2015, de conformidad con el artículo 818 del Estatuto Tributario.

En virtud de lo antes expuesto se procedió a remitir al operador para descargar dicho reporte de las diferentes bases de datos. (anexo imagen)

En igual sentido realizaron una narración normativa e indicó se puede observar que las pretensiones del (la) señor(a) CARMEN EMILIA GUISAO MORENO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 43080547, no están llamadas a prosperar, por cuanto es obligación y menester de la Secretaría de Movilidad de Medellín actuar en observancia y respeto a lo consagrado en la Constitución y la ley, y así se deja evidenciado en los apartes procesales que se anexan, quedando claro que se expidieron todos los actos administrativos donde SE EVIDENCIA QUE TODAS LAS ACTUACIONES SE DESARROLLARON ENCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL QUE LE ASISTE A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE MEDELLIN GARANTIZANDO ASI EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO.

1.2.2 El SIMIT manifestó que, En ejercicio de la función pública atribuida por el legislador en los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002, se autorizó a la "Federación Colombiana de Municipios para implementar y mantener actualizado a nivel nacional" el sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito –Simit, función que se viene cumpliendo a través de la Dirección Nacional –Simit-, como administrador de la base de datos de infractores de las normas de tránsito a nivel nacional, que sirve de herramienta esencial para

llevar un consolidado del registro de los contraventores en el territorio colombiano, lo cual es posible en la medida en que los organismos de tránsito reportan las infracciones de tránsito al sistema de información, es decir al contar con un registro nacional actualizado y disponible a nivel nacional, se garantiza que no se efectúe ningún trámite de los que son competencia de los organismos de tránsito, en donde se encuentre involucrado el infractor en cualquier calidad, si este no se encuentra a paz y salvo.

Por otro lado y de conformidad a lo establecido en los artículos 6, 7, 135 y 159 del Código Nacional de Tránsito, se establece que la competencia para conocer de los procesos contravencionales recae exclusivamente en los organismos de tránsito de la jurisdicción donde se cometió el hecho, motivo por el cual la Federación Colombiana de Municipios, quien ostenta la calidad de administrador del sistema, no está legitimada para efectuar ningún tipo de inclusión, exclusión, modificación o corrección de registros, por cuanto solo se limita a publicar la base de datos suministrada por los Organismos de Tránsito a nivel nacional sobre infracciones y multas impuestas y cargadas por cada organismo.

En los casos en que es necesario efectuar algún ajuste o corrección a la información que ya ha sido reportada al sistema SIMIT, son los organismos de tránsito quienes efectúan el reporte correspondiente, por cuanto legalmente ejercen el proceso contravencional en desarrollo de sus competencias como autoridades de tránsito.

Realizadas las anteriores precisiones y frente al caso objeto de la acción de tutela, esta Dirección revisó el estado de cuenta del accionante No. 43080547 y se encontró que no posee los comparendos objeto de la presente acción, tal y como se evidencia en el cuadro que a continuación copiamos: (imagen anexa)

Manifestamos que la presente acción carece de objeto por encontrarnos frente a un hecho superado, toda vez que el Organismo de Tránsito de Bogotá actualizó la información reportada a la plataforma de información del Simit y reportó la novedad respecto de los comparendos objeto de la presente acción, a través de los medios dispuestos para tal efecto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. - Esta agencia judicial es competente para conocer y fallar de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 de la Constitución Nacional, art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso 2º, numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

2.2. Problema jurídico. - Corresponde a este Despacho Judicial determinar si en efecto la entidad administrativa accionada del orden municipal, vulneró los derechos fundamentales invocados en esta acción por en el trámite contravencional adelantado en virtud de la orden de comparendo nacional No D050010000000007288352, D050010000000007283525, D050010000000005512892, D050010000000005476287, D050010000000005416505, D050010000000009255329, las cuales cuentan con resolución de prescripción.

2.3. Marco Normativo aplicable. - *Constitución Política: Arts. 1, 2, 11, 48, 49, 86, 228, 230. Decreto 2591 de 1991: Arts. 1, 5, 10, 23, 27, 29, 42. Decreto 306 de 1992: Arts. 4 y 6. Decreto 1382 de 2000.*

2.4. De la acción de tutela.- La acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta Política de 1991, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991).

La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. De manera que, al existir estos mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la afectación de sus derechos debe

agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto, exigencia ésta que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrita, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes.

2.5. Marco legal y jurisprudencial del procedimiento administrativo que debe adelantarse ante la comisión de infracciones de tránsito captadas a través de medios tecnológicos

El procedimiento que debe surtirte ante una infracción de tránsito captada por medios tecnológicos está regulado en la Ley 769 de 2002, [p]or la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, y por la Ley 1383 de 2010, [p]or la cual se reforma la Ley 769 de 2002-Código Nacional de Tránsito-, y se dictan otras disposiciones. Entiéndase infracción de tránsito la "[t]ransgresión o violación de una norma de tránsito".

Según lo estipulado en el inciso 5º del Artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por el Artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, las autoridades de tránsito tienen autorización para realizar contratos de medios técnicos y tecnológicos a través de los cuales se permita constatar una infracción de tránsito, así como identificar el "vehículo, la fecha, el lugar y la hora".

En este sentido, es pertinente resaltar que el uso de tecnologías permite a las autoridades de tránsito cumplir su función policiva en el marco de los principios de eficacia y economía, en los términos del Artículo 209 de la Constitución Política y del Artículo 3º, numerales 11 y 12, de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior debido a que se permite acceder a medios probatorios precisos y pertinentes, que logran individualizar el vehículo, el lugar, la hora y el motivo de la infracción, elementos suficientes para iniciar el proceso contravencional. De acuerdo al parágrafo 5 del artículo 8 de la Ley 769 de 2002, la autoridad encargada del Registro Nacional de Conductores está en la obligación de actualizar los datos pertinentes, para el efecto, una de las modalidades empleadas podrá ser la auto declaración. De acuerdo a la norma, en caso de que el propietario no efectuó la declaración será sancionado con multa de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ahora bien, de acuerdo con el inciso 5º del Artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, en el evento en que se realice un comparendo en virtud de una infracción detectada por medios técnicos o tecnológicos, como fotos o videos, la misma deberá ser notificada dentro de los tres días hábiles siguientes por medio de correo, en el cual se enviará la infracción y sus soportes al propietario "quien está obligado a pagar la multa".

Para mayor claridad, es pertinente traer a colación el Artículo 2º de la Ley 769 de 2002, de acuerdo al cual, el comparendo es la "[o]rden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una

infracción. "Por su parte, la multa se encuentra definida, en la misma norma como una "[s]anción pecuniaria".

Se debe precisar, en primer lugar, en lo relacionado con el medio determinado por el legislador para la notificación, que su finalidad consiste en poner en conocimiento del propietario del vehículo la infracción y hacer un llamado para que ejerza su derecho de defensa, contradicción e impugnación. Lo anterior debido a que es a aquel de quien se conoce la identidad y datos de contacto y de quien, en principio, es responsable la utilización adecuada de su vehículo.

Se advierte que si bien, primordialmente, el medio de notificación al que deben recurrir las autoridades de tránsito es el envío de la infracción y sus soportes a través de correo, si no es posible surtir por este conducto, se deberán agotar todas las opciones de notificación, reguladas en el ordenamiento jurídico, para hacer conocer el comparendo respectivo a quienes se encuentren vinculados en el proceso contravencional. Lo anterior, debido a que la finalidad de la notificación, como se dijo anteriormente, no es surtir una etapa a efectos de que permita continuar con el proceso sancionatorio, sino, efectivamente, informar al implicado sobre la infracción que se le atribuye, para que pueda ejercer su derecho de defensa o incluso poner en conocimiento de las autoridades de tránsito la identificación de la persona que pudo haber incurrido en la conducta que se castiga por la Ley 769 de 2002.

(...)

En este sentido, es pertinente aclarar que la notificación se realizará al propietario del vehículo, cuando no sea posible individualizar al infractor, ya que, como se dijo anteriormente, únicamente es posible imponer la sanción a quien hubiere incurrido en ella. Frente a este aparte, en la Sentencia C-530 de 2003, se manifestó lo siguiente:

"Del texto del Artículo 129 de la ley acusada no se sigue directamente la responsabilidad del propietario, pues éste será notificado de la infracción de tránsito sólo si no es posible identificar o notificar al conductor. La notificación tiene como fin asegurar su derecho a la defensa en el proceso, pues así tendrá la oportunidad de rendir sus descargos. Así, la notificación prevista en este Artículo no viola el derecho al debido proceso de conductores o propietarios. Por el contrario, esa regulación busca que el propietario del vehículo se defienda en el proceso y pueda tomar las medidas pertinentes para aclarar la situación. Además, el parágrafo 1º del Artículo 129 establece que las multas no serán impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción. Esta regla general debe ser la guía en el entendimiento del aparte acusado, pues el legislador previó distintas formas de hacer comparecer al conductor y de avisar al propietario del vehículo sobre la infracción, para que pueda desvirtuar los hechos. Lo anterior proscribire cualquier forma de responsabilidad objetiva que pudiera predicarse del propietario como pasará a demostrarse."

Ahora, una vez se logre surtir la orden de comparendo, de acuerdo al Artículo 136 del Código de Tránsito, existen tres opciones, (i) el presunto infractor puede aceptar la contravención y proceder a su correspondiente pago; (ii) manifestar, dentro de los 11 días hábiles siguientes a

la notificación, su inconformidad frente a la infracción impuesta, evento en el cual se procederá a fijar fecha y hora de realización de la audiencia; o (iii) no asistir sin justificación dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, evento en el cual, después de transcurridos 30 días calendario de ocurrida la resunta infracción, el citado quedará vinculado al proceso, en cuyo caso se programará fecha y hora de celebración de la correspondiente audiencia.

En la audiencia, el infractor podrá comparecer por sí mismo o mediante apoderado, quien deberá ser abogado en ejercicio y en dicha diligencia se podrán decretar y practicar pruebas, así como sancionar o absolver al inculpado. La decisión que se adopte, se debe notificar en estrados.

Según el Artículo 137, inciso 3º, si el citado no presenta descargos, ni tampoco solicita pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se debe proceder a registrar la sanción a su cargo en el Registro de Conductores Infractores.

En cuanto a los recursos procedentes, el recurso de reposición procede contra los autos emitidos en audiencia y debe interponerse y sustentarse en la misma audiencia que se emitan. El recurso de apelación procede únicamente contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia, debe interponerse de manera oral y en la misma audiencia que se profiera (Artículo 142, Ley 769 de 2002).

En este orden de ideas, es importante realizar las siguientes precisiones, con base en lo sentado en el Código Nacional de Tránsito y la Jurisprudencia relacionada anteriormente:

1. A través de medios técnicos y tecnológicos es admisible registrar una infracción de tránsito, individualizando el vehículo, la fecha, el lugar y la hora, lo cual, constituye prueba suficiente para imponer un comparendo, así como la respectiva multa, de ser ello procedente (Artículo 129).

2. Dentro de los tres días hábiles siguientes se debe notificar al último propietario registrado del vehículo o, de ser posible, al conductor que incurrió en la infracción (Artículo 135, Inciso 5).

3. La notificación debe realizarse por correo certificado, de no ser posible se deben agotar todos los medios de notificación regulados en la legislación vigente (Artículo 135, inciso 5 y Sentencia C-980 de 2010).

4. A la notificación se debe adjuntar el comparendo y los soportes del mismo (Artículo 135, inciso 5 y Ley 1437 de 2011, Artículo 72).

5. Una vez recibida la notificación hay tres opciones:

a. Realizar el pago (Artículo 136, Numerales 1, 2 y 3).

b. Comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción y manifestar inconformidad frente a la misma, evento en el cual se debe realizar audiencia pública (Artículo 136, inciso 2 y 4 y Artículo 137).

c. No comparecer dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación de la infracción. En este evento, si la persona no comparece dentro de los 30 días hábiles siguientes a la infracción se debe proceder a realizar audiencia Artículo 136, inciso 3 y Artículo 137).

6. En la audiencia se puede comparecer por sí mismo el presunto infractor o por medio de apoderado, quien debe ser abogado en ejercicio (Artículo 138).

7. En audiencia se realizarán descargos y se decretaron las pruebas solicitadas y las que se requieran de oficio, de ser posible se practicarán y se sancionará o absolverá al presunto contraventor (Artículo 136, inciso 4).

8. Contra los autos proferidos en audiencia procede el recurso de reposición, el cual podrá ser presentado y sustentado en la misma audiencia y el recurso de apelación, el cual únicamente procede contra la resolución, con la que se ponga fin a la primera instancia (Artículo 142).

La naturaleza jurídica de la resolución mencionada corresponde a la de un acto administrativo particular por medio del cual se crea una situación jurídica. Por ende, cuando el perjudicado no esté conforme con la sanción impuesta, el mecanismo judicial procedente será el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual permite resarcir el daño causado injustificadamente a un derecho subjetivo”.

Debe tenerse en cuenta que, uno de los requisitos para acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es haber interpuesto los recursos en sede administrativa, sin embargo, cuando no se hubiesen presentado porque las autoridades no lo permitieron, no es posible exigir ese requisito. La falta de notificación de los actos administrativos, implica que los afectados no tengan conocimiento de los pronunciamientos de la administración y, por ende, constituye una barrera para el ejercicio de los recursos procedentes, en consecuencia, cuando el alta de interposición de recursos obedezca a la falta de notificación, es posible acceder al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, aun cuando no se hubiere agotado ese requisito de procedencia.

Por otro lado, también resultaría posible solicitar la revocatoria directa del acto administrativo por medio del cual se impone la sanción, regulada en el Artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011...”.

2.6.- EL CONCEPTO DE HECHO SUPERADO. - La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. De modo que, cuando la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca su protección cesa, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico.

Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte en la T-011 de 2016 ha indicado que “la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En estos

supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.”

2.7. El caso en estudio y solución al problema jurídico planteado. - En el caso sub júdice, que las entidades accionadas realicen el descargue de las fotodetecciones D050010000000007288352, D050010000000007283525, D050010000000005512892, D050010000000005476287, D050010000000005416505, D050010000000009255329, las cuales cuentan con resolución de prescripción dado que las mismas cuentan con resolución de prescripción No 202150127226 DEL 04 DE AGOSTO DE 2021.

Al respecto la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN, manifestó que, l en atención a la tutela de la referencia, me permito informarle que mediante Resolución 202150127226 se resolvió DECLARAR PROCEDENTE la prescripción de la acción ejecutiva, del proceso que se adelanta en contra del (la) señor (a) CARMEN EMILIA GUISAO MORENO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 43080547; en razón del comparendo N° D050010000000007288352, D050010000000007283525, D050010000000005512892, D050010000000005476287, D050010000000005416505, D050010000000009255329, DEL 08/06/2014, 12/06/2014, 20/12/2013, 23/11/2013, 0/09/2013, 19/04/2015, de conformidad con el artículo 818 del Estatuto Tributario.

Por su parte, el SIMIT manifestó que, esta Dirección revisó el estado de cuenta del accionante No. 43080547 y se encontró que no posee los comparendos objeto de la presente acción.

Para verificar sobre el cumplimiento, se procede a consultar la página de la secretaria de movilidad de Medellín en <https://www.medellin.gov.co/portal-movilidad/#/public>

Nro. Comparendo: D05001000000009275815						
C29 - Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida						
Placa o documento		Estado	Valor multa	Pago con descuento	Total a pagar	Seleccionar
MNX128	C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máx... viernes 08 de mayo 2015 Proyección del valor de la multa	Pendiente de pago	COP 322.170 COP 419.067 intereses	COP 161.085 COP 0 Intereses con beneficio	COP 161.085	☐
MNX128	C14 Transitar por sitios restringidos o en horas prohi... lunes 21 de noviembre 2016 Proyección del valor de la multa	Cobro coactivo	COP 344.730 COP 300.772 intereses	COP 172.365 COP 0 Intereses con beneficio	COP 172.365	☐
MNX128	C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máx... jueves 12 de enero 2017 Proyección del valor de la multa	Cobro coactivo	COP 368.865 COP 308.822 intereses	COP 184.433 COP 0 Intereses con beneficio	COP 184.433	☐
MNX128	C2 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos... jueves 16 de febrero 2017 Proyección del valor de la multa	Cobro coactivo	COP 368.865 COP 294.795 intereses	COP 184.433 COP 0 Intereses con beneficio	COP 184.433	☐
MNX128	C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máx... miércoles 26 de julio 2017 Proyección del valor de la multa	Cobro coactivo	COP 368.865 COP 250.476 intereses	COP 184.433 COP 0 Intereses con beneficio	COP 184.433	☐
MNX128	C2 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos... jueves 16 de febrero 2017 Proyección del valor de la multa	Cobro coactivo	COP 368.865 COP 294.795 intereses	COP 184.433 COP 0 Intereses con beneficio	COP 184.433	☐
MNX128	C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máx... miércoles 26 de julio 2017 Proyección del valor de la multa	Cobro coactivo	COP 368.865 COP 250.476 intereses	COP 184.433 COP 0 Intereses con beneficio	COP 184.433	☐
MNX128	C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máx... viernes 20 de abril 2018 Proyección del valor de la multa	Pendiente de pago	COP 390.615 COP 181.067 intereses	COP 195.308 COP 0 Intereses con beneficio	COP 195.308	☐
MNX128	C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máx... martes 20 de noviembre 2018 Proyección del valor de la multa	Pendiente de pago	COP 390.615 COP 126.627 intereses	COP 195.308 COP 0 Intereses con beneficio	COP 195.308	☐
Total multas (7)				COP 1.277.365	COP 0	

Es decir, los comparendos que se relacionan en la acción constitucional, dado que todos datan de 2013, 2014 y 2015, ya no figuran en el sistema, solo figura en el sistema un comparendo de 2015 D05001000000009275815, frente al cual no se hace petición en la presente acción constitucional.

De allí que nos encontremos ante una carencia de objeto por hecho superado, ya que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN y SIMIT, según sus competencias realizaron efectivamente el descargue de las fotodetecciones D050010000000007288352, D050010000000007283525, D050010000000005512892, D050010000000005476287,

D050010000000005416505, D050010000000009255329, declaradas prescritas mediante la resolución No 202150127226 del 04 de agosto de 2021.

Por lo expuesto, el **JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, administrando Justicia en nombre del pueblo y por mandato constitucional,

IV. FALLA

PRIMERO. - DENEGAR la presente acción de tutela **POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO** promovido por **CARMEN EMILIA GUISAO MORENO** en contra de la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MEDELLÍN, ALCALDIA DE MEDELLÍN Y SIMIT** por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE a las partes de manera personal o, en subsidio, vía fax o por el medio más expedito, a más tardar, al día siguiente de la fecha en que se profiere esta decisión.

TERCERO. - De no ser apelado este fallo dentro de los tres días siguientes a su notificación, remítase, al día siguiente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE

JHON FREDY CARDONA ACEVEDO

Juez

MCH

Firmado Por:

Jhon Fredy Cardona Acevedo
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Juzgado 014 Promiscuo Municipal
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1a75c1313e8de606fa5aefe970c21d2dc9353474978ad465e795d3f67dfe5286**

Documento generado en 30/09/2021 09:32:29 a. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>